

Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-952-2020 del 3° Juzgado de Letras de Punta Arenas, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de diez de febrero de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda deducida por don José Luis Pacheco Cisternas, por indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral, la suma de de \$100.000.000 (cien millones de pesos)

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por sentencia de dos de mayo de dos mil veintidós, la confirmó con declaración que rebaja el monto a la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000).

Contra esa sentencia la parte demandante, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

Primero: Que, en cuanto al recurso de casación en la forma, el recurrente denuncia como primer error de los sentenciadores la infracción al artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, ultrapetita, ya que el tribunal extendió su razonamiento para reducir la indemnización a un punto no sometido a discusión, ya que no consta en parte alguna que se solicite limitar la misma a cuánto tiempo duró la prisión. Motivo de sobra para entender materializado el vicio denunciado en el artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Añade que en el recurso del Consejo de Defensa del Estado reiteraron como agravios que no se hubiese considerando la excepción de reparación satisfactoria, la excepción de prescripción, y que el monto de la indemnización



sería muy alto, solicitando que se aplique a su criterio lo dispuesto en la causa Miranda con Fisco de Chile, junto a que se les exima de la condena en costas.

Segundo: Que la defensa esgrime como segunda causal de casación en la forma la contemplada en el artículo 768 N° 5 en relación 170 N° 4 ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Refiere que hubo total omisión y/o falta de consideración pormenorizada al total de los hechos expuestos por el demandante, como en especial los reconocidos por el Tribunal ad quo, y consecuentemente, a la prueba rendida, es decir, tortura, hacinamiento y allanamientos u hostigamientos. En particular los allanamientos y hostigamientos posterior a su liberación duraron años, hasta el término de la dictadura, es decir, un plazo superior a 20 días que el Tribunal tuvo como base de cálculo.

Añade además que no existen consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento en la sentencia para excluir la tortura, hacinamiento y allanamientos sufridos por su representado.

Indica que, como ya se acreditó citando los vistos, como también los considerandos segundo, tercero y cuarto, que el fallo de marras se limita a la prisión política. No contiene pormenorizadamente las consideraciones de hecho que le sirven de fundamento, con precisión sobre lo que versa el tema a fallar, con distinción de las aceptadas, reconocidas y/u objeto a discusión. Y mucho menos se hace cargo de la prueba rendida en segunda instancia.

Refiere que por último no existen consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento en la sentencia para excluir las costas.

Pide que se invalide aquella parte del fallo que por este acto se impugna, y acto seguido, y sin nueva vista, dicte sentencia de reemplazo por la cual se enmienden los errores denunciados, condenado a la demandada a



pagar la suma solicitada en la demanda, o la que esta Corte estime pertinente y de justicia, por concepto de daño moral. Todo lo anterior con condena en costas.

Tercero: Que, respecto a la primera causal de nulidad formal, esta Corte ya ha asentado que el defecto formal de ultra petita ocurre cuando la sentencia, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones y excepciones o defensas, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. Luego, se hace necesario dilucidar si en la especie el fallo objetado que confirmó la sentencia de primer grado existe un desajuste entre lo resuelto y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. Al efectuar el examen aludido entre los extremos que señala la doctrina, esto es, acción y excepción o defensa, respecto a lo decidido, se concluye que no existe discordancia alguna, por cuanto la sentencia rebaja el monto de la indemnización que fue uno de los planteamientos de defensa tanto en la contestación de la demanda como en la apelación de la sentencia de primera instancia.

Al efectuar el examen aludido entre los extremos que señala la doctrina, esto es, acción y excepción o defensa y lo decidido, se concluye que no existe discordancia alguna entre lo pedido y lo negado, por cuanto el Consejo de Defensa del Estado en el escrito de apelación a la sentencia definitiva funda como tercer motivo de agravio el monto de la indemnización fijado en la sentencia de primera.

En consecuencia, el pronunciamiento censurado no se aleja de lo discutido en el proceso, resultando evidente que los sentenciadores han actuado dentro del ámbito de las atribuciones que les son propias, por



habérselas otorgado los litigantes en sus escritos fundamentales o por el propio ordenamiento jurídico, sin que se hayan extendido a puntos no sometidos a su decisión. Que, en esta línea de razonamiento no resulta admisible -por este primer capítulo- el recurso de casación en la forma interpuesto.

Cuarto: Que, en relación a la segunda causal de casación fundada en el artículo 768 N° 5 en relación al artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber rebajado la indemnización por el daño moral padecido por las demandantes sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial

Quinto: Que en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *–en lo que atañe al presente recurso–* en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

Sexto: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.



Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida –*prosigue el Auto Acordado*– deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

Séptimo: Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también



se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

Octavo: Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

Noveno: Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su



libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

Décimo: Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, deba necesariamente realizarse *prudencialmente*, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

Undécimo: Que, al dictar la sentencia impugnada confirman la sentencia apelada con declaración que se reduce el monto de la indemnización



ordenada por daño moral a la suma de cincuenta millones de pesos (\$ 50.000.000), razonando para ello en el considerando cuarto lo siguiente:

“Que atendido lo analizado se dará lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por el actor, que estos sentenciadores fijan prudencialmente en la suma que se dirá en lo resolutivo, atendidos los hechos de la causa establecidos en el considerando tercero del fallo apelado, entre ellos el lugar (Primera Comisaría de Carabineros y Cárcel Pública de esta ciudad- y tiempo que duró su detención –20 días en total-, así como el reconocimiento de su calidad de víctima del Estado Chileno de detención de carácter política y que como consecuencia de la misma se le activó una sintomatología de carácter postraumático hasta la fecha de la presentación de la Demanda”.

Duodécimo: Que de la lectura del recurso y la sentencia recurrida, no se evidencia la falta de fundamentación alegada, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a los fundamentos para rebajar la indemnización, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de fundamentación, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por la defensa dan cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones a las que arriba el tribunal, por lo que las denuncias relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida, desestimándose el arbitrio en este punto.



Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma, deducido don José Luis Pacheco Cisternas, en contra de la sentencia de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 68-2022, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Abuaud.

Rol N° 14.429-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Ministro Sr. Brito y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por estar ausente, respectivamente.



En Santiago, a seis de diciembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

